

Carta Munduruku del Alto y Medio Tapajós y Bajo Teles Pires

Nosotros, caciques, caticas, guerreros, maestros, mujeres y las asociaciones indígenas Pariri, Wakoborün, Aro, Arikico, Da'uk, Movimento Ipereg Ayü, CIMAT, nos reunimos el 14 de septiembre de 2022 en la aldea Sawre Muybu, donde organizamos una audiencia para discutir los resultados de la investigación de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre los altos niveles de mercurio en nuestros cuerpos y en el pescado que comemos a diario. Todo lo que ya hemos sentido en términos de síntomas, se ha confirmado por el resultado de este estudio. Estamos aquí buscando una solución. En primer lugar, queremos que se detenga urgentemente la actividad minera en nuestro territorio. Culpamos al gobierno actual por su omisión y por el hecho de que nos está enfermando a través de la contaminación por mercurio.

La minería sólo trae enfermedades. Además del mercurio, también hay un brote de malaria en nuestra región, así como diarrea, hambre y picores en la piel. Nuestros ríos están siendo destruidos, nuestros arroyos están muriendo y nuestros peces se están extinguiendo. Hoy en día bebemos agua sucia, nuestros hijos se bañan en ríos contaminados con barro y pescamos en agua que parece leche. Nos pusimos muy tristes cuando vimos los resultados - ¿quién quiere que sus hijos se enfermen? Además de las enfermedades, nuestros dirigentes viven amenazados y ya han sufrido graves actos de violencias, les han quemado sus casas y han destruido la sede de las asociaciones y organizaciones de resistencia en Jacareacanga.

Mientras nos reuníamos para discutir la contaminación y una solución para la salud de nuestro pueblo, recibimos noticias, fotos y vídeos de una otra reunión, organizada por la Asociación Pusuru, sobre los créditos de carbono, en la aldea de Karapanatuba, con la presencia de organismos municipales. En esa reunión, la empresa ofreció dinero a la asociación, dinero que sólo engaña a los familiares y trae división. La bolsa de dinero se ofrece para invadir el territorio. ¿De dónde sale ese dinero? Sabemos desde enero de 2022 que la empresa Carbonext y la empresa Mapel Marochi Agricultura e Pecuária LTDA están tratando de implementar proyectos de créditos de carbono en el Bosque Nacional de Crepori. Este lugar que el Gobierno denomina Unidad de Conservación es un territorio tradicionalmente ocupado por el pueblo Munduruku, principalmente por las 25 aldeas del río Tropas, que utilizan las dos orillas del río. Ya hemos informado de ello al Ministerio Público Federal desde que estas empresas se pusieron en contacto con nosotros por correo electrónico.

Esta misma área, la Flona Crepori, está bajo presión del Servicio Forestal Brasileño y del ICMBio que intentan subastar el territorio para que las empresas saquen madera, en proyectos de concesiones forestales. Hemos preparado un documento para el Ministerio Público Federal, para los organismos públicos competentes y para la sociedad en su conjunto, explicando que estamos en contra de estos proyectos.

En primer lugar, todo el mundo debe saber que la Flona Crepori es territorio Munduruku. En segundo lugar, sabemos que todos estos proyectos se presentan con justificaciones mentirosas. Dicen que son para la preservación de los bosques, para detener las actividades ilegales, pero sabemos que estas "soluciones" que vienen de fuera no respetan nuestras formas de vida y nuestra autonomía para pensar y cuidar al territorio. No necesitamos que ninguna empresa venga a controlar el uso de nuestro territorio y nos diga cómo conservar el bosque. Sabemos que cuando las empresas hacen estas "compensaciones" es porque quieren seguir destruyendo otros lugares y quieren ganar dinero con lo que siempre hemos hecho en nuestra tierra, durante miles de años.

Esta empresa Mapel Marochi está representada por Leonel B. Marochi. También es el dueño de la empresa Indussolo, que quería robar las tierras de nuestros aliados los ribereños de Montanha y Mangabal.

Ahora dicen que una amplia zona de Flona también es suya. Hay que respetar nuestros territorios ancestrales, tanto los nuestros como los de los ribereños. ¿Por qué las empresas no preguntan qué soluciones creamos y ofrecemos? Llevamos siglos debatiendo sin parar qué es lo que hay que hacer para proteger las tierras que siempre hemos cuidado y que el pariwat ha empezado a destruir, mintiendo y engañando a sus propios familiares.

Tenemos nuestras organizaciones e intercambiamos con pueblos indígenas de todo el país. Nuestros líderes y caciques han escuchado de otros pueblos indígenas cómo el proyecto de créditos de carbono ha causado mucha división entre ellos. Todo por estas promesas de dinero de parte de empresas externas.

Ya tenemos nuestro plan de vida, nuestras organizaciones de resistencia y alternativas de generación de ingresos a través de productos tradicionales, que deben ser fortalecidos. Y eso debe hacerse aumentando nuestra autonomía y gestión sobre el territorio, no al revés.

Conocemos muy bien nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada, que está en el Convenio 169 de la OIT. Esta reunión celebrada por Pusuru no tiene ningún valor. Por eso hemos elaborado nuestro Protocolo de Consulta. Afirma que la consulta sólo funciona si se realiza con todo el pueblo, tanto en el alto como en el medio Tapajós. Confirmamos que Pusuru ya ha sido denunciado por nuestros caciques por dejar entrar el pariwat en nuestro territorio. Pusuru es Daydu, traidor al pueblo. Pusuru puede ser una asociación, pero no representa al pueblo Munduruku. Además, no tiene sentido que las empresas quieran hablar con un líder en las redes sociales. Tienen que responder ante el Ministerio Público Federal por la forma en que pisotean nuestro Protocolo de Consulta. Ya se han publicado dos cartas en contra de este proyecto de créditos de carbono: una de los dirigentes del río Cururu y otra de la Asociación Dace. Ahora nos hemos unido a otras siete organizaciones de Munduruku para repetir que el pueblo Munduruku ya tiene su Protocolo de Consulta y debe ser consultado de acuerdo con él sobre cualquier proyecto vecino a nuestras tierras que nos afecte. Repetiremos la denuncia en contra de esos emprendimientos ilegales hasta que aprendan a respetar nuestros derechos.

No negociamos con nuestro territorio ni la vida de nuestros hijos. La vida de nuestros hijos no tiene precio. No hay dinero que pueda comprarlo. Seguiremos luchando,

enseñando a nuestros hijos sin codicia y sin enfermedad con el propio gobierno de Karodaybi y Wakoborün.

Estamos aquí para exigirlo:

- que las empresas Carbonext y Mapel dejen inmediatamente de intentar negociar nuestro territorio con la Asociación Pusuru
- la prohibición de la venta de mercurio en las tiendas y la compra de oro en el municipio de Jacareacanga e Itaituba.
- la cancelación inmediata de los PLGs en las Tierras Indígenas y en los alrededores de nuestro territorio en el municipio de Jacareacanga / Itaituba
- que tengamos seguridad y seguimiento de los defensores amenazados en sus pueblos por la Funai
- que las autoridades hagan la vigilancia de las pistas de aterrizaje de Itaituba e Jacareacanga dentro de los territorios indígenas, a través de los cuales se transporta el mercurio y el oro;
- que haya la continuidad en la investigación de los crímenes del ataque a la aldea Fazenda Tapajós y castigo a los responsables
- que las tierras indígenas de Sawre Muybu y Sawre Bapim sean demarcadas. Cuanto más se retrasa esta demarcación, más aumentan las invasiones, la contaminación por mercurio y todos los males de la minería ilegal, la tala, la extracción del palmito, la pesca y la caza ilegal.

También lo solicitamos:

- que el Ministerio Público Federal exija la anulación de cualquier contrato o documento firmado, por no haber seguido nuestro Protocolo de Consulta
- que la Defensoría Pública Federal (DPU) cubra las indemnizaciones del Gobierno Estatal y Federal que está fomentando la invasión de la minería en nuestro territorio. Es culpa de ellos que estemos enfermos por el mercurio.
- que Fiocruz y otras organizaciones y médicos continúen los estudios sobre la contaminación por mercurio.
- que se organice una audiencia con la DPU, el MPF y los organismos socioambientales responsables de la protección de la selva, los ríos y las tierras indígenas, como la Funai, el Ibama, el ICMBio, para que se dé seguimiento a las denuncias que ya hemos hecho y los organismos puedan trabajar juntos para apoyarnos en las soluciones que ya estamos construyendo.